



# Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

18 de noviembre de 2013

Original: español/inglés

---

## Implementation Review Group

Resumed fourth session

Panama, 26-27 November 2013

Agenda item 2

**Review of implementation of the United  
Nations Convention against Corruption**

## Executive summary: Argentina

### Note by the Secretariat

The present conference room paper is made available to the Implementation Review Group in accordance with paragraph 36 of the terms of reference of the Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption (Conference of the States Parties resolution 3/1, annex). The summary contained herein corresponds to a country review conducted in the first year of the first review cycle. An unofficial English translation follows the original Spanish version of the summary.



## Resumen

### Argentina

#### 1. Introducción - Sinopsis del marco jurídico e institucional establecido por Argentina en el contexto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

La República Argentina está organizada territorialmente de acuerdo a un esquema federal de gobierno, donde las provincias que la componen se reservan los poderes no expresamente delegados al gobierno nacional (art. 121 CN). El establecimiento de los delitos y las penas corresponde al Congreso Nacional, quedando reservada su aplicación, mediante el dictado de los códigos de procedimiento, a las autoridades provinciales (artículo 75(12) de la Constitución); cada provincia habrá de establecer la manera en que se hará efectiva la persecución y el juzgamiento por los delitos previstos en el Capítulo III de esta Convención.

A nivel federal, los delitos abarcados por esta Convención son juzgados por jueces y fiscales en lo criminal y correccional federal, que tienen su asiento en la Ciudad de Buenos Aires y también se encuentran distribuidos a lo largo del territorio del país. La investigación de estos delitos se inicia por denuncia, tanto de organismos públicos como de particulares, en cuyo caso debe existir una actividad de impulso por parte del Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción pública que nace del delito, y sin cuyo requerimiento no es posible que el juez dé inicio a un proceso por esta clase de delitos. También los procesos penales pueden iniciarse por la actividad preventiva de las fuerzas de seguridad, pero no es algo usual en los delitos de corrupción.

El sistema procesal federal prevé que el juez de instrucción sea el director del proceso quien a tal efecto puede llevar adelante aquellas medidas que estime conducentes para el descubrimiento de la verdad (allanamientos, intervenciones telefónicas, pedidos de informes, etc.). Éste puede, a su criterio, delegar en los fiscales la investigación de estos delitos, pudiendo reasumir su investigación cuando lo estime conveniente. En casos de corrupción administrativa existe un organismo dentro del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que también lleva investigaciones relativas a hechos de corrupción y subsidiariamente puede intervenir en aquellos procesos en donde el fiscal interviniente estime que no existe mérito para continuar la investigación.

El sistema procesal admite que el particular damnificado por el delito pueda constituirse como parte querellante en el proceso, sugiriendo medidas o apelando aquellas decisiones que no le sean favorables, pudiendo asumir tal rol tanto el organismo público afectado por el caso de corrupción en concreto, como la Oficina Anticorrupción, organismo especializado en este tipo de casos, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

## 2. Capítulo III - Penalización y aplicación de la ley

### 2.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen

#### *Soborno y tráfico de influencias (artículos 15, 16, 18 y 21)*

Artículo 15: El Código Penal Argentino prevé el soborno activo de funcionarios públicos nacionales en sus artículos 258 y 259 (de conformidad con la Ley 25,188). La diferencia entre los Artículos 258 y 259 radica en que, en el primero, quien da u ofrece el dinero, las dádivas u otras promesas espera que funcionario público haga, retarde o deje de hacer algo propio de sus funciones. Por el contrario, en el segundo caso, lo que se entrega u ofrece son obsequios que superan la mera cortesía, en consideración de la función o cargo que ostenta el agente público, pero sin esperarse ninguna acción u omisión concreta. Se precisa aclarar la interpretación del concepto de la promesa. En general, la doctrina y la jurisprudencia asimilan el concepto de “ofrecer”, propio del artículo 258 como una de las acciones típicas del delito de cohecho activo, con la acción de “prometer”. Cabe señalar que la modificación de los conceptos de “funcionario público” y “funciones públicas”, previstos en el artículo 77 del Código Penal están siendo analizados en el marco de una reforma integral del Código Penal, con el objetivo de ampliar su ámbito de aplicación.

El Código Penal Argentino prevé el soborno pasivo de funcionarios públicos nacionales en sus artículos 256, 257, 259 y 266-268. La diferencia entre el Artículo 259 y los Artículos 256 y 257 radica en que los segundos requieren del funcionario público o del magistrado un compromiso venal, consistente en hacer, retardar o dejar de hacer algo propio de sus funciones. Para la configuración del delito no es necesario el cumplimiento del compromiso o acuerdo, sino que basta la mera aceptación de la promesa o la simple recepción del dinero o las dádivas. En cambio, el Artículo 259 no exige ninguna acción como contraprestación de la dádiva sino que esta solamente se ofrece en consideración del oficio del funcionario público.

Se estima que el Código Penal argentino cubre los elementos de los tipos penales contenidos por este artículo.

Artículo 16 (a): El Código Penal Argentino prevé el soborno activo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas en su artículo 258 bis. Cabe resaltar que el delito de soborno transnacional se encuentra redactado de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo en materia de soborno transnacional de funcionarios públicos extranjeros en el marco de las transacciones económicas internacionales (aprobada por ley 25.319) que funciona en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El concepto de funcionario público extranjero no está definido legislativamente. Sin embargo, a fin de cumplir con las exigencias emanadas de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 10 de mayo de 2010 el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar el Artículo 77 del Código Penal. Se estima que el ordenamiento jurídico interno de la República de Argentina está conforme con éste párrafo del artículo 16.

Artículo 16 (b): Argentina no tiene legislación que cubra la conducta descrita en el artículo 16 párrafo 2. No obstante, se considera que la figura está internamente cubierta por el cohecho pasivo previsto en los artículos 256 y concordantes del Código Penal, y que la figura está además abarcada por la regulación interna de los países que reprimen el cohecho de sus propios funcionarios.

Artículo 18: El Código Penal Argentino prevé el tráfico de influencias activo en su artículo 258, 256 bis primer párrafo y el pasivo en artículo 256 bis del Código Penal. La República Argentina está en línea con la Convención, pues a pesar de no tratarse el presente artículo de una disposición de obligada transposición, su ordenamiento jurídico interno tipifica tanto el tráfico de influencias activo como el pasivo.

Artículo 21: En Argentina no se encuentra regulado el soborno en el sector privado como un delito específico. Se puede tratar a estas conductas a partir de la tipificación del fraude (artículos 172-174 del Código Penal). En los casos del artículo 174 incisos 4-6, el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además de la sanción general la inhabilitación especial perpetua. Asimismo se señala el artículo 312 del Código Penal, integrado por la Ley 26.733 del 28 de diciembre de 2011, el cual penaliza el soborno pasivo en las instituciones financieras.

*Blanqueo de dinero, encubrimiento (artículos 23 y 24)*

Artículos 23 y 24: Según la información proporcionada inicialmente por la República Argentina, el artículo 278 el Código Penal argentino tipificaba toda operación por la que se que convirtiera, transfiriera, administrara, vendiera, gravara o aplicara de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquirieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor superara la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000), fuera en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Luego de la adopción de la Ley 26.683 del 21 de junio de 2011, Argentina proporcionó actualizaciones relevantes vinculadas a la información sobre la implementación del artículo 23. En particular, se observa el artículo 303 del Código penal, que reemplaza al artículo 278 derogado por la Ley 26.683. El artículo 303 del Código penal argentino tipifica toda operación por la que se que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Es preciso observar que el artículo 303 del Código Penal está redactado de tal manera que el propósito con que se realiza la “conversión” o “transferencia” es irrelevante, solo basta para la tipificación del delito que la acción típica sea llevada a cabo “con la posible consecuencia “ que la propiedad adquiera la apariencia de legalidad; asimismo, este artículo que ha sido integrado a la legislación por la Ley 26.683 prevé la criminalización del “auto-lavado”. Cabe señalar también que el artículo 304 del Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el blanqueo del producto del delito. El delito de encubrimiento tipificado en el artículo 277 del Código Penal cubre el segundo elemento de la “conversión o la transferencia” (eludir las investigaciones o consecuencias

jurídicas de los actos). Esa figura también se corresponde con el delito de “ocultación o disimulación” (artículo 23,1 (a), ii).

*Malversación o peculado, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito*  
(artículos 17, 19, 20 y 22)

Artículo 17: El Código Penal Argentino prevé la malversación y el peculado en sus artículos 260-262 y 263. Otras formas de desviación de bienes por un funcionario público son previstos en sus artículos 172-174. En cuanto al beneficio de terceros, y a fin de evitar problemas probatorios y para lograr una mayor protección al bien jurídico tutelado, la legislación argentina se desentiende del uso posterior que pueda darse a los bienes malversados, y por ello el artículo 261 del Código Penal sanciona el mero apartamiento, separación y extracción de dichos bienes del ámbito de custodia del funcionario público.

Artículo 19: El derecho Argentino prevé disposiciones sobre el abuso de funciones en una variedad de artículos del Código Penal sobre negociaciones incompatibles (artículo 265), estafas y administración fraudulenta (artículos 172-174), exacciones ilegales (266-268), abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248-251), así como en los artículos 1 y 2 de la Ley de Ética Pública. Ésta prevé las obligaciones de todas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Artículo 20: El artículo 268 (2) del Código Penal tipifica el delito de enriquecimiento ilícito. El sujeto activo de este delito no está limitado solo a personas que se encuentren en el ejercicio de la función pública, sino que se extiende además a todos aquellos que, habiendo cesado en el ejercicio de la función, recién exteriorizan su riqueza indebida hasta dos años después de haberse desvinculado de la función pública (vea el artículo 268 (2) del Código Penal).

Artículo 22: La figura de la malversación o peculado en el sector privado se encuentra tipificada por los artículos 173 (7) (Administración infiel), 301 (Fraudes al Comercio y a la Industria) y, posterior a la adopción de la Ley 26.733, los artículos 307 a 311 (Delitos contra el orden económico y financiero) del Código Penal.

*Obstrucción de la justicia (artículo 25)*

Varias normas del Código Penal argentino tienden al cumplimiento de esta disposición al tipificar el empleo de intimidación o fuerza contra un funcionario público y el delito de amenazas, incluyendo un agravamiento de la referida conducta penal cuando las amenazas tienen como objetivo obtener algún tipo de concesión por parte de los poderes públicos. Asimismo, la regulación del cohecho prevé que se penalice el falso testimonio obtenido mediando soborno. Los artículos relevantes en el Código Penal de Argentina son los 237, 238, 149 bis, 275, 276 y 80, 89, 91 y 92.

*Responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 26)*

El Código Penal argentino no prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la “Parte General” de su articulado. En estas condiciones no existen sanciones penales para las personas jurídicas por su participación en los delitos tipificados con arreglo a la Convención, con excepción del artículo 23, después de la adopción de la Ley 26.683. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra prevista en delitos especiales como el de Lavado de Activos de Origen Delictivo (Cfr. artículos 303 y 304 del Código Penal, según Ley N° 26.683); y también en los delitos de uso indebido de información privilegiada o manipulación de valores negociables en la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de esos instrumentos financieros (Cfr. artículos 307/313 del Código Penal, según la Ley 26.733). En particular el artículo 304 del Código Penal establece la sanción de multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito a la persona jurídica, así como suspensión total o parcial de actividades y publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica, entre otras.

Asimismo en la actualidad existen diversos regímenes específicos que regulan la actuación de las entidades en diversos campos de la actividad económica, y que prevén la posibilidad de que puedan ser objeto de sanciones de tipo penal-administrativa (por ejemplo en el Código Aduanero, la Ley de Defensa de la Competencia, el Régimen Penal Cambiario, entre otros).

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha elaborado un proyecto que prevé la posibilidad de incriminar a las personas jurídicas, el cual se encuentra bajo consideración de la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación. Dicho proyecto establece claramente que la responsabilidad del ente es independiente de las personas físicas involucradas y que las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aún en el caso de que quienes hubieran actuado en su nombre, representación, interés o beneficio, no resultaran condenados, siempre que el delito se haya comprobado. La propuesta de reforma establece un catálogo de sanciones adecuadas a la índole de los sujetos a quienes habrán de aplicarse, que van desde la multa que no podrá superar el 33% del patrimonio neto de la entidad, suspensión de actividades por hasta tres años, la cancelación de la personería jurídica, suspensión de beneficios estatales, entre otras sanciones.

*Participación y tentativa (artículo 27)*

El artículo 45 del Código Penal penaliza las diferentes formas de participación en un delito, mientras que la participación en grado de tentativa está regulada en los artículos 42 y 44 del mismo. Los actos preparatorios no son punibles en el ordenamiento jurídico de Argentina.

*Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (artículos 30 y 37)*

Artículo 30: Los delitos cometidos contra la Administración Pública, en los que se inscriben los delitos de corrupción, son sancionados con penas cuyos máximos en los delitos más frecuentes alcanzan los seis años de prisión. Dentro de las escalas penales previstas para cada delito, el Código Penal determina las pautas para que al momento de dictar sentencia condenatoria los Tribunales fijen el monto de la pena

para el caso concreto.

En el año 2000 se promulgó la Ley 25.320, que elimina el principal obstáculo para el avance de la investigación o enjuiciamiento de legisladores, funcionarios y magistrados, sin derogar las reglas de la Constitución que prescribe ciertos fueros para los diferentes funcionarios.

El Código Procesal Penal no contiene normas de carácter discrecional o principio de oportunidad alguno, que permita a los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, como titulares de la acción pública, disponer de la acción penal una vez que se ha dado inicio a una instrucción o investigación de algún delito previsto en el Código Penal o sus leyes complementarias.

Según el artículo 3 de la Ley 25.188 sobre Ética de la función pública, si los funcionarios no observaran como requisito de permanencia en el cargo una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función. Asimismo, en el reglamento de Investigaciones Administrativas regulado por el Decreto N° 467/99, se prevén como medidas preventivas el traslado, la suspensión por un período determinado o la suspensión por período indeterminado o hasta que se resuelva una investigación criminal.

Los delitos por hechos de corrupción, además de las penas de prisión y/o multa, prevén penas de inhabilitación especial, ya sea perpetua o por tiempo determinado; o inhabilitación absoluta perpetua para el caso del delito de enriquecimiento ilícito (artículos 5 y 19 a 20 ter del Código Penal y artículos 5 y 6 de la Ley Nacional de Empleo Público (Ley 25.164)). Los artículos 19 a 20 ter del Código Penal se refieren a la “privación del empleo o cargo público”. La Procuración del Tesoro de la Nación ha emitido una serie de dictámenes sobre la inclusión dentro del concepto de funcionario público a los empleados y directivos de sociedades con participación Estatal.

Artículo 37: En la República de Argentina existe legislación vigente que aborda la aplicación del Artículo 37 y se examina la cuestión dentro del marco de una reforma integral del Código Penal. No existe una ley o medida que disponga la mitigación de la sentencia conforme al Artículo 37(2) debido a un principio legal fundamental de la nación que prohíbe las concesiones con respecto a la sentencia y/o inmunidad ante el procesamiento. No obstante, el proceso de juicio abreviado del artículo 431 bis del Código Procesal Penal puede usarse para negociar una sentencia menor.

*Protección de testigos y denunciantes (artículos 32 y 33)*

Artículos 32 y 33: La legislación argentina posee normas (no estructuradas en un solo cuerpo normativo) que permiten brindar protección a testigos, denunciantes e imputados de hechos de corrupción. Si bien el programa nacional de protección de testigos e imputados (Ley 25.764) contiene una lista tasada de infracciones penales por las que se puede otorgar la referida protección, entre los que no están explícitamente previstos los delitos relacionados con la corrupción, de facto, existe una vía de cobertura a través del artículo 1 (2) que ofrece protección en casos no expresamente tasados en la ley.

*Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (artículos 31 y 40)*

Artículo 31: El Artículo 23 del Código Penal establece que el decomiso comporta el desapoderamiento definitivo del bien en cuestión, el cual deberá ser ejecutado a través de un procedimiento de remate y su producto será entregado a los damnificados con el fin de reparar el daño causado por el delito; con el decomiso también se busca evitar que el producto o provecho del delito beneficie, en cualquiera de las formas que puedan asumir dichos bienes, a quienes los han perpetrado o han facilitado su legitimación. Al introducirse el delito de lavado de activos, se ha reforzado el principio general establecido en el artículo 23 del Código Penal. En relación al levantamiento del Secreto Bancario, el artículo 39 de la Ley 21.526 o Ley de Entidades Financieras permite que en tanto exista una causa judicial abierta, los jueces podrán ordenar la remisión o incautación de documentación, sin que pueda ser opuestos a ellos el secreto bancario. Cabe señalar que en caso de que no se cumpla con el requerimiento del juez, las personas implicadas incurrirían en un delito de incumplimiento de una obligación judicial.

Artículo 40: Conforme a las previsiones de los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras (Ley N° 21.526), el sistema jurídico argentino preserva el secreto bancario respecto a las operaciones financieras pasivas, en las que el banco capta, recibe o recolecta dinero de las personas, comúnmente materializadas a través de los depósitos bancarios. Como puede advertirse de la lectura del artículo 39 de la Ley 21.526, la solicitud de información amparada por el secreto bancario efectuada por un juez en el marco de una investigación por los delitos previstos en esta Convención, no está subordinada ni sujeta a exigencia probatoria previa alguna. Por otra parte la Unidad de Información Financiera puede recabar información que pudiera estar amparada por el secreto, ya que la misma Ley 26.087, a través de su artículo 1, agregó al artículo 14(1), de la Ley 25.246 el siguiente párrafo: “En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.”

*Prescripción; antecedentes penales (artículos 29 y 41)*

Artículo 29: El código penal argentino en su artículo 59 establece que la acción penal se extinguirá por la prescripción. Por su parte, los artículos 62 y 63 establecen los plazos para la extinción de la acción penal (entre uno y quince años, dependiendo de la pena correspondiente) y las reglas para el cómputo del inicio de la prescripción, respectivamente. Similarmente, los artículos 65 y 66 del Código Penal prevén los términos de la prescripción de las penas (entre dos y veinte años, según la condena) y las reglas de cómputo del inicio de la prescripción, también respectivamente. Las causas de suspensión e interrupción de la prescripción están descritas en el artículo 67. Si en una causa de corrupción hay varias personas implicadas, tratándose una de ellas un funcionario público, mientras que este funcionario siga en la función pública, el plazo de prescripción no comienza a operar, es decir el cómputo solo se iniciará una vez que el sujeto abandone la función pública.

Artículo 41: Argentina cumple con esta disposición de la Convención a través de los artículos 79 de la Ley 24.767, la Ley 22.117 y el artículo 51 del Código Penal.



Este último establece que no podrán informarse datos sobre procesos sobreesidos o donde se hubiera dictado sentencia absolutoria, regulando también lo atinente al régimen de caducidad del registro de las sentencias de condena.

*Jurisdicción (artículo 42)*

Artículo 42: La República de Argentina puede juzgar a sus nacionales cuando se rechaza la solicitud de extradición a otro país (artículo 12 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal) . En el caso de que en el tratado de extradición se establezca que la nacionalidad es irrelevante, y la persona no tenga la opción de ser juzgada en Argentina, debe ser imperativamente extraditada. La tendencia marca que las extradiciones de nacionales son otorgadas; en caso de que no haya tratado de extradición, la persona tiene la opción de ser juzgada en Argentina por el mismo juzgado que tendría la facultad de rechazar la extradición. En éste caso, se reclamarán las pruebas existentes al Estado requirente.

*Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios (artículos 34 y 35)*

Artículo 34: La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N° 25.188) prevé la nulidad de los actos administrativos dictados en conflicto de intereses. En este sentido, su artículo 17 establece: “Cuando los actos emitidos por los sujetos del artículo 1° estén alcanzados por los supuestos de los artículos 13, 14 y 15, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta en los términos del artículo 14 de la ley 19.549”. Otras posibles consecuencias de un acto de corrupción son la responsabilidad por daños y perjuicios; la reposición al estado anterior a la comisión del delito (artículo 29 Cód. Penal) y la inadmisibilidad de ofertas en licitaciones.

Artículo 35: En el marco legal de la República de Argentina, se considera entre los posibles damnificados por hechos de corrupción no solo al Estado, sino también a cualquier persona física o jurídica que hubiere sufrido alguna de las consecuencias de los actos. No se presentaron casos de aplicación práctica.

*Autoridades especializadas y coordinación entre organismos (artículos 36, 38 y 39)*

Artículo 36: La aplicación coercitiva de la ley en casos de los denominados delitos de corrupción competen en el sistema argentino al Poder Judicial, más precisamente a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal. La Oficina de Coordinación en Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), creada con el objeto de colaborar con los fiscales intervinientes en causas de corrupción, fue reemplazada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), creada por la Resolución PGN N°914/12, del 20 de diciembre de 2012. Esta nueva estructura institucional se encuentra integrada por un equipo de fiscales y funcionarios especializados que coordinan diversas Áreas Operativas. La República Argentina también cuenta con una Fiscalía de Investigaciones Administrativa, organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, y con una Oficina Anticorrupción, creada por la Ley 25.233 del 10 de diciembre de 1999, que es una dependencia adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que tiene como objetivo elaborar y

coordinar programas de lucha contra la corrupción. Otras instituciones relevantes son la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación. La designación del Procurador General de la Nación se efectúa mediante un procedimiento de concurso público transparente.

Artículo 38: El marco legal de Argentina consagra la obligación específica de todos los funcionarios de denunciar los delitos de los que tengan conocimiento. De acuerdo al artículo 177.1 del Código Procesal Penal, tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 1 del Decreto-Ley 1162/00, dichos funcionarios y empleados públicos cumplirán su deber legal poniendo a la Oficina Anticorrupción en conocimiento de los hechos y/o pruebas que fundamenten la presunción de la comisión de un delito perseguible de oficio cometido en el ámbito de la Administración Pública Nacional y todo ente público o privado con participación del Estado. Según el artículo 2 del mismo Decreto-Ley, los presuntos delitos que no sean objeto de investigación por parte de la Oficina Anticorrupción deberán ser denunciados ante el Juez, el Agente Fiscal o ante la Policía por dichos funcionarios y agentes.

Artículo 39: La República de Argentina cuenta con un prolijo marco normativo e institucional que permite aplicar esta disposición. Sin embargo, se consideró pertinente destacar el alcance del artículo 14(1) de la ley 25.246, que declara que: “En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera los secretos bancarios, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.”

## **2.2. Éxitos y buenas prácticas**

Artículo 15: Se considera positivo que el artículo 77 del Código Penal en relación al concepto de funcionario público está siendo revisado en el marco de una reforma integral del Código Penal.

Artículo 29: Se considera una buena práctica el hecho de que, en caso de producirse la interrupción de la prescripción con relación a un funcionario público, el mismo cómputo aplicará a los restantes partícipes.

Artículo 33: Se considera una buena práctica la protección otorgada a los denunciantes al existir la posibilidad de presentar denuncias anónimas o con reserva de identidad ante diversos organismos y la presentación vía web, por e-mail o por teléfono.

Artículo 36: Se considera una buena práctica el reconocimiento de la facultad de presentarse como parte querellante que tiene la Oficina Anticorrupción, con independencia de la acción penal que corresponda al Ministerio Público.

## **2.3. Desafíos y recomendaciones**

Artículo 15: Tan solo se recomendaría que se iniciaran las reformas legislativas necesarias del Código Penal argentino en el caso de que la jurisprudencia relativa a la interpretación del concepto de dádiva evolucionase en un sentido distinto.

Artículo 16(b): Se recomendaría clarificar en la normativa interna la figura de soborno pasivo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas.

Artículo 26: Se celebran los esfuerzos que están siendo realizados para incorporar en el ordenamiento jurídico interno la criminalización de las personas jurídicas por la comisión de alguno de los delitos contenidos en la Convención; se recomendaría que la República de Argentina avance en incorporar legislativamente la responsabilidad de las personas jurídicas para todos los delitos además de aquellos previstos en el artículo 23 de la Convención.

Artículo 32: Se estima que Argentina posee la legislación que permite proteger a testigos, peritos y víctimas, sin embargo, la inclusión de delitos de corrupción no es automática, por lo que se recomienda que Argentina considere su inclusión en una posible reforma legislativa por la que se amplíe el programa de protección de testigos incluyendo de forma directa los delitos de corrupción y perjuicio a la administración pública.

Artículo 39: Se recomendaría mantener información o estadísticas sobre el éxito de este régimen legal y sobre las garantías y protecciones dadas a los altos ejecutivos que reportan presuntos delitos.

### **3. Capítulo IV - Cooperación internacional**

#### **3.1. Observaciones sobre la aplicación de los artículos objeto de examen**

*Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de actuaciones penales (artículos 44, 45 y 47)*

Artículo 44: La Ley 24.767 regula la Cooperación Internacional en materia penal, según la cual Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda en materia penal. Si existiera un tratado de extradición, sus normas regirán el trámite de la ayuda; de otra forma, la ayuda estará subordinada a la existencia u ofrecimiento de reciprocidad. Se permite la extradición pasiva de nacionales, en cualquier caso el requerido podrá optar por ser juzgado por los tribunales argentinos. Cuando un tratado habilite la extradición de nacionales, declarada procedente la extradición, el Poder Ejecutivo deberá resolver si hace lugar o no a la opción planteada en la etapa de decisión final. Argentina requiere la doble incriminación; sin perjuicio de ello, se observa la posibilidad de prestar asistencia a pesar de no contar con doble incriminación. Si un Estado requiriese una extradición por varios delitos, bastará que uno de ellos cumpla con esta condición para que la extradición pueda ser concedida respecto de los restantes. Se observa que es compatible con la legislación interna la utilización de la Convención como base normativa de un pedido de extradición pese a no haber normativa interna específica que lo contemple.

La extradición no podrá ser concedida por delitos políticos, delitos previstos solo en la ley penal militar, si se sospechara que no serían aseguradas sus garantías individuales, cuando existan especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden públicos, si el delito ha prescrito según la ley del Estado requirente, si la persona requerida ya hubiese sido juzgada por el mismo delito, si es inimputable por razón de edad según la ley argentina, cuando la condena se hubiese dictado en rebeldía, entre las principales razones. La solicitud de extradición y toda otra

documentación que se envíe posteriormente, deberá ser cursada por vía diplomática. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dictaminare dar curso al pedido, le dará trámite judicial a través del ministerio público fiscal. Si dictaminare que el requerimiento no cumple con alguna condición de admisibilidad, el Poder Ejecutivo resolverá. El ministerio público fiscal representara en el trámite judicial el interés por la extradición. Sin perjuicio de ello, el Estado requirente podrá Intervenir como parte en el trámite judicial por medio de apoderados.

Artículo 45: El traslado de personas condenadas hacia su país de origen posee basamento en cuestiones humanitarias. La República Argentina ha celebrado varios Tratados sobre la materia. La competencia en materia de traslados de condenados es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 47: Las leyes argentinas impiden ceder jurisdicción con base a criterios de oportunidad o conveniencia. La remisión de actuaciones penales solo se producirá en el supuesto que la justicia argentina se declare incompetente para investigar un delito.

*Asistencia judicial recíproca (artículo 46)*

La República Argentina ha designado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como Autoridad Central a los efectos del artículo IV de la Convención. Esta puede ser utilizada como base en pedidos de asistencia jurídica en materia penal, sin perjuicio de que la Ley 24.767 garantiza la asistencia sin necesidad de la existencia de un tratado específico que la regule.

Las autoridades que intervengan en pedidos de asistencia judicial recíproca actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda (artículo 1 de la Ley N° 24767). Argentina brinda asistencia en investigaciones relacionadas con personas jurídicas.

Conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, Argentina exige que el hecho que motiva la solicitud de asistencia constituya delito solo para ciertas medidas de asistencia, ya que la regla es la no exigencia de doble incriminación; no es requisito indispensable que el sujeto investigado sea susceptible de ser penado por la justicia argentina, sino simplemente que el hecho sea delito también en Argentina.

La legislación no contiene una enumeración sobre las medidas de asistencia que pueden ser solicitadas, sin perjuicio de ello, se describen procedimientos aplicables ante ciertas medidas (citación imputado, testigo o perito; declaración en Argentina; traslado de persona privada de libertad; provisión de documentación).

La República Argentina, a través de las autoridades encargadas de llevar adelante investigaciones penales, forma parte de una serie de redes a través de las cuales transmiten información permanentemente con otras autoridades de diversos países. En las mismas redes, participan Autoridades Centrales o representaciones diplomáticas.

Conforme lo establecido por el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras (N° 21.526, ya citada), dentro del título V denominado “Secreto”, las entidades financieras no pueden revelar datos sobre las operaciones pasivas. Sin embargo,

una de las excepciones contempladas por la misma legislación respecto a dicho impedimento está dada por los requerimientos que efectúen los jueces en el marco de una causa.

En el caso de traslado de una persona a Argentina, se prevé la obligación de restitución inmediata una vez cumplidas las diligencias por las que había sido solicitado.

Las causales de denegación de asistencia judicial están previstas legislativamente por la Ley 24767. En este sentido, denegar una extradición solo puede fundarse en los artículos 8 a 10 de la Ley, no siendo la implicación de cuestiones tributarias uno de los motivos de denegación de asistencia.

Argentina posee una política activa respecto a la firma de Acuerdos sobre asistencia en materia penal que contribuyan a una mejor cooperación en la lucha contra el delito.

La República Argentina no posee una normativa específica para el inciso 19, sin perjuicio de ello, ha demostrado que su cometido puede ser alcanzado aún a falta de normativa.

*Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de investigación (artículos 48, 49 y 50)*

**Artículo 48:** A nivel regional la República Argentina integra diversos mecanismos de cooperación internacional en materia penal, que contemplan las medidas solicitadas por los apartados a) al f) del inciso 1, de este artículo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como Autoridad Central en lo que respecta a la Cooperación Internacional en Materia Penal, utiliza de manera permanente el correo electrónico para comunicarse con otras Autoridades Centrales y otros actores de la cooperación. Para agilizar las tareas de cooperación dicho ministerio ha destinado una casilla de correo específico a esos fines, y que esas mismas comunicaciones se realizan a través de la Red de la OEA.

**Artículo 49:** En el marco del MERCOSUR se aprobó el texto del “Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados para la creación de Equipos Conjuntos de Investigación”, el cual plasma normativamente prácticas que se han desarrollado en los últimos años. El preámbulo del Acuerdo menciona expresamente como fuente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

**Artículo 50:** Argentina es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (de Diciembre de 1988), aprobada por Ley 24.072, cuyo artículo 11 legisla expresamente la denominada “entrega vigilada”, y aprobó por Ley 26.139 la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (adoptada en Nassau-Bahamas, el 23 de mayo de 1992). Asimismo, el ordenamiento jurídico argentino cuenta con la figura del agente encubierto.

### **3.2. Éxitos y buenas prácticas**

**Artículo 44:** Se considera una buena práctica el hecho de que la República Argentina acuerde extradiciones aún en la ausencia de tratado en vigor.

### 3.3. Recomendaciones generales

- Se subraya la necesidad de continuar aplicando una política activa de reforma penitenciaria y de asignar, en la medida de lo posible, los recursos presupuestarios necesarios para ello.
- En lo relativo a los pedidos de extradición y asistencia judicial recíproca, se recomendaría que las autoridades competentes continúen haciendo esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los procedimientos correspondientes en el menor tiempo posible.
- Se recomendaría continuar desarrollando el sistema de información actualmente en curso, con el objeto de recopilar de forma sistemática información sobre casos de extradición y asistencia judicial recíproca, con el fin de facilitar el seguimiento de esos casos y de evaluar de manera más eficiente la eficacia de la aplicación de las disposiciones en materia de cooperación internacional.
- Se recomendaría seguir explorando oportunidades para participar activamente en acuerdos bilaterales y / o multilaterales, con el objetivo de mejorar la eficacia de las diferentes formas de cooperación internacional.

[Unofficial translation]

## Executive Summary

### Argentina

#### 1. Introduction – Overview of the legal and institutional framework of Argentina in the context of implementation of the United Nations Convention against Corruption

The Republic of Argentina is territorially organized under a federal scheme, in which the provinces that make up the Republic reserve the powers not expressly delegated to the national government (art. 121 of the Constitution). The National Congress has the faculty of establishing the crimes and sanctions, and their application is reserved, through the codes for procedure, to the provincial authorities (art. 75(12) of the Constitution); each province must establish the way in which the prosecution and trial for the crimes established in accordance with Chapter III of the Convention will be enforced.

At the federal level, the crimes covered in the Convention are tried by federal judges and prosecutors in federal penal and correctional matters, who are based in the City of Buenos Aires and also spread throughout the country. The investigation of the crimes begins with a police report, from both public and private entities, in which case the Public Prosecutor must initiate an action, as the owner of the public action derived from the crime; without this request from the Public Prosecutor, it is not possible for the judge to begin proceedings for the crimes of corruption. Criminal proceedings may also be initiated by preventive activities carried out by security forces, but this is not usual for the crimes of corruption.

The federal procedural system establishes that the examining judge must direct the proceedings, and it is this judge who may take any measures that are deemed convenient to clarify the truth (raids, phone tapping, requests for information, etc.). The judge may, at his/her own discretion, delegate to the prosecutors the investigation of these crimes, and may take over the investigation again whenever he/she deems convenient. There is an entity within the Public Prosecution, the National Office for Administrative Investigations, which also performs investigations related to acts of corruption and may additionally intervene in any proceeding where the prosecutor considers that there are no grounds to continue the investigation.

The procedural system allows the private citizen affected by the crime to become a plaintiff in the proceedings, and to suggest measures or appeal any decision that is not favorable to him or her; this role may be assumed by the public entity affected by the particular case of corruption, and by the Anticorruption Office, an entity specialized in corruption cases, which operates under the Ministry of Justice and Human Rights.

#### 2. Chapter III: Criminalization and law enforcement

##### 2.1 Observations on the implementation of the articles under review

*Bribery offences; trading in influence (art.15, 16, 18, 21)*

Article 15: the Argentinean Criminal Code criminalizes the active bribery of national public officials in articles 258 and 259 (under Law 25.188). The difference between articles 258 and 259 is that, in the former, the person who gives or offers the money, gifts or other promises expects the public official to act, delay or to refrain from performing an act related to his or her duties. In the latter, what is being delivered or offered are gifts that exceed simple courtesy, considering the function or position of the public agent, but without expecting any concrete action or omission. The interpretation of the concept of “promise” needs to be clarified. In general, doctrine and case law liken the concept of “offering” - one of the typical actions in the crime of active bribery from article 258- with the action of “promising”. It should be noted that the amendment of the concepts of “public official”

and “public functions” of article 77 is being analyzed within the framework of a comprehensive reform of the Criminal Code, with the objective of broadening their scope.

The Argentinean Criminal Code typifies the passive bribery of national public officials in articles 256, 257, 259 and 266-268. The difference between article 259 and articles 256 and 257 is that the latter two require from the public official or the magistrate a commitment to being bribed, consisting in acting or delaying or refraining from acting in the exercise of their duties. For the crime to exist it is not necessary that the commitment or agreement be fulfilled- the mere acceptance of the promise or the reception of the money or the gifts suffices. In turn, article 259 doesn't require any action in exchange for the gift, which is only being offered due to the position of the public official.

It is considered that the Argentinean Criminal Code provides for the elements of the crimes covered in this article.

Article 16 (a): The Argentinean Criminal Code penalizes the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in article 258 bis. It must be noted that the crime of transnational bribery is drafted following the recommendations from the Working Group on Transnational Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (approved by Law 25.319) which operates within the framework of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). There is no legal definition of the concept of foreign public official. However, in order to meet the obligations stemming from the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions of the OECD, on 10 May, 2010, the Executive Branch submitted to Congress a draft law for the amendment of article 77 of the Criminal Code. It is considered that the internal legal system of the Republic of Argentina complies with this paragraph of article 16.

Article 16 (b) Argentina has no legislation covering the conduct described in article 16 paragraph 2. Nonetheless, it is considered that the concept is included in the offence of passive bribery provided for in article 256 and related articles of the Criminal Code, and additionally covered by the internal legislation of countries that punish the bribery of their own officials.

Article 18: The Argentinean Criminal Code criminalizes active trading in influence in articles 258 and 256 bis and the passive form in article 256 bis of the Criminal Code. The Republic of Argentina is in line with the Convention, given that its internal legal system criminalizes both active and passive trading in influence.

Article 21: Argentina does not regulate bribery in the private sector as a specific crime. These actions may be dealt with using the concept of fraud (art. 172-174 of the Criminal Code). In the cases provided for in article 174 paragraphs 4-6, the convicted person, in the case of public officials or employees, will, in addition to the general sanction, be subject to special perpetual disqualification. In addition, it is noted that article 312 of the Criminal Code, added through Law 26.733 of 28 December 2011, penalizes passive bribery occurring in financial institutions.

*Laundering of proceeds of crime; concealment (art.23, 24)*

Articles 23 and 24: According to the information initially provided by Argentina, article 278 of the Criminal Code penalized any operation in which money or other property that are the proceeds of a crime in which the person is not involved are converted, transferred, managed, sold, encumbered or otherwise applied, with the potential consequence of giving the original or subrogating properties the appearance of being of a legal origin, provided that their value exceeds the amount of fifty thousand pesos (\$ 50.000), either in a single action, or through the reiteration of various interrelated actions. After the adoption of Law 26.683 of June 21, 2011, Argentina provided updated relevant information related to the implementation of article 23. In particular, article 303 of the Criminal



Code is noted, which replaces article 278, repealed by the same Law. Article 303 of the Argentinian Criminal Code penalizes any operation in which a person converts, transfers, manages, sells, sets a lien, disguises or otherwise brings into market circulation any assets obtained from criminal activity, thus possibly causing such illicit assets or their products to appear as having a legal origin, provided that their value exceeds the sum of three-hundred thousand (\$300,000) pesos, whether in a single operation or through the repetition of several related operations. It is worth noting that article 303 of the Criminal Code is written in such a manner that the purpose for which a “conversion” or “transfer” is done is irrelevant. In order to classify this offence, it is only necessary for the predicate offence to be carried out “with the possible consequence” that the property appears to have a legal origin; in addition, this article provides for the criminalization of “self-laundering”.

It should be noted that article 304 of the Criminal Code provides for criminal liability of legal persons in the laundering of proceeds of crime.

The offence of concealment established in article 277 of the Criminal Code provides for the second element of the “conversion or transfer” (to evade investigations or legal consequences of acts). That figure also corresponds to the offence of “concealment” or “disguising” (art. 23,1 (a), ii).

*Embezzlement; abuse of functions; illicit enrichment (art.17, 19, 20, 22)*

Article 17: The Argentinean Criminal Code provides for the offence of embezzlement in articles 260-262 and 263. Other forms of diversion of property by a public official are criminalized in articles 172-174. Regarding the benefit for third parties, and in order to avoid evidentiary problems and to achieve a greater protection of the legal asset, Argentinean law overlooks the subsequent use that may be given to the embezzled property; therefore, article 261 of the Criminal Code penalizes only the separation, severance and extraction of said property from the custody of the public official.

Article 19: Argentinean law includes provisions on the abuse of functions in various articles of the Criminal Code on incompatible dealings in the exercise of public functions (art. 265), scams and fraudulent administration (art. 172-174), illegal levies (art. 266-268), abuse of authority and violation of the duties of public officials (art. 248-251), as well as in articles 1 and 2 of the Law for Public Ethics. This law covers the obligations of any person who permanently or temporally performs a public function at any level and hierarchy, by popular election, direct appointment, per contest or by any other legal means, and its application is extended to any magistrate, State official or employee.

Article 20: Article 268 (2) of the Criminal Code establishes the crime of illicit enrichment. The active subject of this crime is not only limited to those persons exercising a public function, but is extended to any other person who, having ceased to exercise said function, has recently manifested his or her wealth after 2 years of having been separated from the public function (see article 268 (2) of the Criminal Code).

Article 22: The concept of embezzlement in the private sector is established in articles 173(7) (Unlawful Administration), 301 (Frauds to Commerce and Industry) and, after the adoption of Law 26.733, articles 307 to 311 (Crimes against the economic and financial order) of the Criminal Code.

*Obstruction of justice (art.25)*

Several regulations of the Argentinean Criminal Code tend to comply with this provision, by establishing the use of intimidation or force against a public official and the crime of threats, including an aggravation of said criminal conduct when the threats intend to obtain any concession from public authorities. Likewise, the regulation of bribery provides for the criminalization of perjury which comes about as a result of a bribery. The relevant articles in the Criminal Code of Argentina are 237, 238, 149 bis, 275, 276 and 80, 89, 91 and 92.

*Liability of legal persons (art.26)*

The Argentinean Criminal Code doesn't provide for the criminal liability of legal persons in the "General Part" of its articles. In this context, there are no criminal sanctions for legal persons for their participation in the crimes established in accordance with the Convention, with the exception of article 23, after the adoption of Law 26.683. Criminal liability of legal persons is foreseen in special crimes such as Laundering of Criminal Assets, (art. 303 and 304 of the Criminal Code, in accordance with Law 26.683) and also in the offences of misuse of privileged information or manipulation in securities trading, listing, purchase, sale and settlement of those financial instruments (art. 307-313 of the Criminal Code, Law 26.733). In particular, article 304 of the Criminal Code provides for punishment of a fine of two (2) to ten (10) times the value of the property subject of the crime imposed on the legal person as well as partial or total suspension of activities and publication of an extract of the conviction at the expense of the legal person, among others.

Currently there are also various specific arrangements governing actions of companies in various fields of economic activity, and which provide for the possibility that they may be subject to penal-administrative sanctions, (for example in the Customs Code, the Law on Protection of Competition, Criminal Foreign Exchange Regime, among others.)

The Ministry of Justice and Human Rights has developed a project that foresees the possibility of incriminating legal persons, which is being considered by the Criminal Law Committee of the National Congress. This project makes clear that the responsibility of the entity is independent of individuals involved and that legal sanctions may apply even in the case that those who have acted on their behalf, in their representation, interest or benefit, are not condemned, provided that the offence is proven. The proposed amendment establishes a catalogue of sanctions which correspond to the nature of the subjects to whom it is to be applied, ranging from the fine which may not exceed 33% of net assets of the entity, suspension of activities for up to three years, the cancellation of the legal personality, suspension of state benefits, among other sanctions.

*Participation and attempt (art.27)*

Article 45 of the Argentinean Criminal Code criminalizes the different forms of participation in a crime, while the participation as an attempt is regulated in articles 42 and 44 of the code. Preparatory actions are not punishable under the legal system of Argentina.

*Prosecution, adjudication and sanctions; cooperation with law enforcement authorities (art.30, 37)*

Article 30: Crimes against the Public Administration, which include crimes of corruption, are sanctioned with maximum penalties of, for the most frequent crimes, up to six years of prison. Within the penal tiers provided for each crime, the Criminal Code determines the applicable guidelines in order for the courts to establish the penalty for each concrete case at the time of issuing a conviction.

Enacted in the year 2000, Law 25.320 eliminates the main obstacle for the progress of the investigation or the trial of legislators, officials and magistrates, without derogating the rules of the National Constitution that prescribe certain immunities for different officials.

The Code of Criminal Procedure does not contain discretionary rules or any principle of opportunity which the judges of the Judiciary or the Public Ministry, as holders of public action, could apply in criminal proceedings once an investigation has begun of any offence under the Criminal Code or any complementary laws.

According to article 3 of Law 25.188 on Ethics in the public service, if the officials did not observe, as a requirement for remaining in tenure, a conduct in accordance with public ethics in the performance of their

duties, they shall be punished or removed through the procedures established in the regulations relating to their service. In addition, the code of Administrative Investigations regulated by Decree No. 467/99, envisages as preventive measures, the transfer of an individual, suspension for a fixed period or suspension for an indefinite period or until a criminal investigation is resolved.

The offences of corruption, in addition to imprisonment and / or fine, also foresee the penalty of disqualification, whether perpetual or for a fixed term; or perpetual disqualification for the offense of illicit enrichment (art. 5 and 19 to 20b of the Criminal Code and articles 5 and 6 of the National Public Employment Act (Law 25.164)). Articles 19 to 20b of the Criminal Code refer to the “deprivation of public office”. The Office of the Attorney for the National Treasury has issued a number of opinions regarding the inclusion, within the concept of public servant, employees and executives of companies with at least some level of State participation.

Article 37: Argentina has legislation that covers the implementation of article 37, and in addition currently there is an ongoing comprehensive reform of the Criminal Code. There is no law or norm that allows for the mitigation of the sentence in accordance with article 37(2) due to a fundamental legal principle of the Nation which prohibits concessions with respect to the judgment and / or immunity from prosecution. However, the summary judgment process provided for in article 431 bis of the Criminal Procedure Code can be used to negotiate a lesser sentence.

*Protection of witnesses and reporting persons (art.32, 33)*

Articles 32 and 33: Argentinean legislation has standards (not structured in a single normative body) which allow for the provision of protection to witnesses, reporting persons and persons indicted with acts of corruption. While the national program for the protection of witnesses and indicted persons (Law 25.764) contains a rated list of criminal offences for which protection may be granted and it doesn't explicitly include crimes of corruption, article 1(2) offers de facto protection as it refers to cases that are not expressly provided for by the law.

*Freezing, seizing and confiscation; bank secrecy (art.31, 40)*

Article 31: Article 23 of the Criminal Code establishes that seizure entails the final divestment of the property in question, which must be executed in an auction, and the proceeds of the auction will be given to the affected parties, in order to repair the damage caused by the crime; the seizure also seeks to avoid that the proceeds or product of crimes, whichever form these benefits may assume, benefit those who have committed the crime or facilitated its legitimation. By introducing the crime of laundering of assets, the general principle established in article 23 of the Criminal Code has been reinforced. Regarding the lifting of bank secrecy, article 39 of Law 21.526 or the Law on Financial Entities allows that, provided that a criminal proceeding is ongoing, the judges may order the remission or seizure of documents, and bank secrecy may not be used to oppose their request. It must be noted that, if the order of the judge is not complied with, any individual involved would be incurring in the crime of breaching a judicial obligation.

Article 40: According to the provisions of articles 39 and 40 of the Law on Financial Entities (Law 21.525), the Argentinian legal system preserves bank secrecy in respect of passive financial operations, in which the bank captures, receives or collects money from individuals, commonly carried out through bank deposits. As can be noticed in a reading of article 39 of Law 21.526, a request for information protected by banking secrecy which is issued by a judge within the investigation of a crime of corruption is not subject to any evidentiary requirement. On the other hand, the Financial Information Unit may collect information that may be covered by banking secrecy, since the same Law 26.087, through article 1, added to article 14(1), of Law 25.246, the following paragraph: “Within the investigation of a report of suspicious operation, the individuals considered in article 20 may not use the argument of banking, stock or professional secrecy against the Financial Information Unit, nor any legal or contractual commitments related to confidentiality.”

*Statute of limitation; criminal record (art.29, 41)*

Article 29: The Argentinean Criminal Code, in article 59, establishes that criminal prosecution will be extinguished by the statute of limitations. In turn, articles 62 and 63 establish the periods for the extinction of criminal prosecution (between one and fifteen years, depending on the corresponding sanction) and the rules for the calculation of the start of the prescription, respectively. Likewise, articles 65 and 66 of the Criminal Code establish the terms of the prescription of penalties (between two and twenty years, according to the sentence) and the rules for the calculation of the start of the prescription, also respectively. The causes for the suspension and interruption of the prescription are described in article 67. In a corruption case involving several people, one of which is a public official, while the official remains at the public function the statute of limitations will not start to operate, or in other words, the calculation may only start once the individual has left the position.

Article 41: Argentina complies with this provision of the Convention through articles 79 of Law 24.767, Law 22.117 and article 51 of the Criminal Code. The latter establishes that no data shall be disclosed in relation to dismissed proceedings, or proceedings which have resulted in acquittal, also regulating everything related to the regime of expiration of conviction records.

*Jurisdiction (art.42)*

Article 42: The Republic of Argentina may prosecute its nationals when an extradition request from another country is rejected (art. 12 of Law for International Cooperation in Criminal Matters). If the treaty establishes that the nationality is irrelevant, and the person will not have the option of being prosecuted in Argentina, the person must be extradited. Recent trends show that the extraditions of nationals are granted. If no extradition treaty exists, the person has the option of being prosecuted in Argentina by the same court that would have the power to reject the extradition. In this case, any existing evidence will be requested to the requesting State.

*Consequences of acts of corruption; compensation of damage (art.34,35)*

Article 34: The Law for Ethics in the Exercise of Public Function (N° 25.188) provides for the annulment of administrative acts dictated in a conflict of interests. In that regard, article 17 establishes that: “Whenever the acts committed by the subjects of article 1 are covered by the premises of articles 13, 14 and 15, they will be *void ab initio*, without prejudice to the rights of third parties in good faith. In the case of the issuance of an administrative act, it will be *void ab initio* under the terms of article 14 of Law 19.549”. Other possible consequences of an act of corruption are: liability for damages; returning things to their previous state before commission of the crime (art. 29 of the Criminal Code); and the inadmissibility of offers for tender.

Article 35: The legal framework of the Republic of Argentina considers not only the State as a party that may be affected by acts of corruption, but also any natural or legal person who may have suffered any consequence of the acts. No instances of practical application were presented.

*Specialised authorities and inter-agency coordination (art.36,38, 39)*

Article 36: The enforcement of the law for the crimes of corruption is the competence of the federal judges and prosecutors in federal criminal and correctional matters. The Office for the Coordination of Crimes against the Public Administration (OCDAP), which had been created with the goal of cooperating with the prosecutors working on corruption cases, was replaced by the Office of Economic Crime and Money Laundering (PROCELAC), created by resolution No. 914/12, of December 20, 2012. This new organizational structure is composed of a team of specialized prosecutors and coordinates various areas of operations. Argentina also has the Prosecutor's Office of Administrative Investigations, an agency specialized in the investigation of acts of corruption and administrative irregularities committed by agents of the National Administration, as well as an

Anti-Corruption Bureau, created by Law 25.233 of December 10, 1999, which is an agency under the Ministry of Justice and Human Rights, and which aims to develop and coordinate programmes to combat corruption. Other relevant institutions are the Comptroller General of the Nation (SIGEN) and the Auditor General's Office. The appointment of the Attorney General is done through a transparent tender procedure.

Article 38: The legal framework of Argentina consecrates the specific obligation of all officials to report any crimes they become aware. According to article 177.1 of the Code of Criminal Procedure, officials and public employees shall be obliged to report prosecutable crimes if they gain knowledge of their existence during the exercise of their functions. According to article 1 of Decree-Law 1162/00, said officials and employees shall fulfill this legal duty by making the Anticorruption Office aware of the facts and / or evidence in support of the presumption of the commission of an indictable crime committed in the scope of the National Public Administration and of all public or private entities with at least partial State ownership. According to article 2 of the Decree-Law, the alleged crimes that are not investigated by the Anticorruption Office shall be reported to the judge, the prosecutor or to the police, by such officials and employees.

Article 39: The Republic of Argentina has an exemplary regulatory and institutional framework that allows for the application of this provision. However, it was considered pertinent to highlight the scope of article 14(1) of law 25.246, which states that: “Within the investigation of a report of suspicious operation, the individuals considered in article 20 may not use the argument of banking, stock or professional secrecy against the Financial Information Unit, nor any legal or contractual commitments related to confidentiality.”

## **2.2 Successes and Good Practices**

Article 15: It is considered a positive development that article 77 of the Criminal Code with regard to the concept of public official is being revised in the framework of a comprehensive reform of the Criminal Code.

Article 29: It is considered a good practice that, in the case of an interruption of the prescription with relation to a public official, the same calculation applies to other participants.

Article 33: It is considered a good practice that protection is provided to reporting persons, as the possibility exists of submitting anonymous reports or protecting their source before various agencies, and that there is the possibility of submitting reports via web, e-mail or by phone.

Article 36: It is considered a good practice to recognize the right of the Anticorruption Office to appear as plaintiff, independently of the criminal action that corresponds to the Public Ministry.

## **2.3 Challenges and Recommendations**

Article 15: It is recommended that the necessary legislative reforms of the Argentinean Criminal Code be started, if the case law related to the interpretation of the concept of “gift” were to evolve in a different direction.

Article 16(b): It is recommended to clarify the figure of passive bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in the internal legislation.

Article 26: The efforts that are being made by the Republic of Argentina to incorporate into domestic law the criminal liability of legal persons which commit any of the offenses contained in the Convention are praised, and it would be recommended that Argentina continue making progress in this regard for all other offences in addition to those relating to article 23 of the Convention.

Article 32: It is considered that Argentina has legislation that protects witnesses, experts and victims; however, the inclusion of crimes of corruption is not automatic, so it is recommended that Argentina considers including in a possible legislative reform the extension of the witness protection program corruption offenses and damages to the public administration.

Article 39: It is recommended that information or statistics on the success of this legal provision and on the guarantees and protections afforded to top executives who report alleged crimes, be kept.

### **3. Chapter IV: International cooperation**

#### **3.1 Observations on the implementation of the articles under review**

*Extradition; transfer of sentenced persons; transfer of criminal proceedings (art. 44, 45, 47)*

Article 44: Law 24.767 regulates International Cooperation in criminal matters, according to which Argentina shall provide the fullest assistance in criminal matters to any State that requires it. Where an extradition treaty exists, its norms will regulate the procedure for the assistance; in the absence of a treaty, such assistance will be subject to the existence or offer of reciprocity. The passive extradition of nationals is permitted, in which case the requested individual may choose to be tried by Argentinian courts. Where a treaty provides for the extradition of nationals, the Executive must resolve whether or not to grant the existing option in the final decision phase.

Argentina requires the principle of double criminality; without prejudice to this, the possibility of providing assistance even in the absence of double criminality exists. If a State requests an extradition for several offences, it would be sufficient that at least one of the offences be punishable under Argentinian law for the extradition to be granted for the others. It is noted that the use of the Convention as the regulatory basis or an extradition request is compatible with the internal laws, even if there are no specific regulations contemplating it.

Extradition may not be granted for political crimes, for offences only foreseen under military law, if there is doubt that due process and individual rights would not be upheld, when there exist special reasons related to national sovereignty, security or public order, if the crime had prescribed under the law of the requesting State, if the requested person had already been tried for the same crime, if the individual cannot be held liable under Argentinian law for reason of age, when the penalty has been imposed in absentia, among the main reasons. The extradition request and all other documentation must be sent via the diplomatic channels. When the Ministry of Foreign Affairs and Worship has decided to proceed with the consideration of the extradition request, the legal proceeding is led by the office of the public prosecutor. If the Ministry decides that a certain condition has not been met, the Executive Power will resolve the issue. The office of the public prosecutor will represent the extradition request in any legal proceeding; without prejudice to this, the requesting State may intervene as a party in the legal proceedings through representatives.

Article 45: The transfer of sentenced persons to their country of origin is based on humanitarian grounds. The Republic of Argentina has entered into several Treaties on the matter. The competence on the transfer of sentenced persons belongs to the Ministry of Justice and Human Rights.

Article 47: Argentinean law prevents the cession of jurisdiction based on criterions of opportunity or convenience. The remission of criminal records will only be produced when the Argentinean justice systems declares itself unable to investigate a crime.

*Mutual legal assistance (art.46)*

The Republic of Argentina has designated the Ministry of Foreign Relations and Worship as the Central Authority for the purposes of article 46(13) of the Convention. The Convention may be used as the basis in requests for mutual legal assistance in criminal matters, notwithstanding that Law 24.767 guarantees the assistance without the need for a specific treaty on the matter.

The intervening authorities will act as quickly as practicable in regards to requests for mutual legal assistance, so that the case is handled in an expeditious manner so as to prevent the assistance from becoming irrelevant (art. 1 of Law N° 24767). The Republic of Argentina provides assistance in investigations involving legal persons.

Under the provisions of paragraph 2 of article 68 of the Law for International Cooperation in Criminal Matters, Argentina requires that the act that gives rise to the request for assistance constitute a crime only for certain assistance measures, since the rule is not to demand dual criminality. It is not an indispensable requirement that the subject being investigated be susceptible punishment under Argentinean law, but rather that the conduct also constitute a crime in Argentina.

The law doesn't list the assistance measures that may be requested; however, some procedures that may be applied to certain measures are described (issuing a subpoena for the defendant, witness or expert; testifying in Argentina; transferring imprisoned persons; provision of documents).

The Republic of Argentina, through the authorities in charge of criminal investigations, is part of a series of networks, through which there is a permanent transmission of information with other authorities from various countries. Central Authorities or diplomatic representatives also participate in the networks.

Under the provisions of article 39 of the Law on Financial Entities (N° 21.526), under title V, "Secrecy", financial entities may not disclose data on passive transactions. However, one of the exceptions foreseen by the same law with regard to said impediment is provided by the requests from judges as part of a case.

In the case of the transfer of a person to Argentina, the obligation of immediate restitution is foreseen after completing the proceedings for which the person was requested.

The grounds for refusal of mutual legal assistance are provided for in Law 24.767. In that sense, refusing an extradition may only be based on articles 8 - 10 of the aforementioned Law, which doesn't include fiscal matters as one of the reasons for refusing assistance.

Argentina has an active policy regarding the execution of agreements on assistance in criminal matters that may contribute to an increased cooperation in the fight against crime.

The Republic of Argentina does not possess specific norms for paragraph 19 of this article; without prejudice to this, it has demonstrated that the paragraph's objectives may be reached even in the absence of such norms.

*Law enforcement cooperation; joint investigations; special investigative techniques (art.48, 49, 50)*

Article 48: On the regional level, the Republic of Argentina is part of several mechanisms for international cooperation in criminal matters, which have the purpose of making the exchange of information between the authorities of the different countries more expeditious, contemplating the measures requested by sections a) to f) of paragraph 1 of this article. The Ministry of Foreign Relations and Worship, as the Central Authority with regard to International Cooperation in Criminal Matters, permanently uses e-mail to communicate with other Central Authorities and other stakeholders in international cooperation. In order to expedite the tasks of cooperation, the Ministry has devoted a specific mailbox for this purpose, and the same communications are also carried out through the OAS network.

Article 49: In the framework of MERCOSUR, the text of the “Framework Agreement for Cooperation between State Parties of MERCOSUR and Partner States for the creation of Joint Investigation Teams” was approved. This is an innovative framework at the regional level, which reflects in regulatory terms practices that have been evolving in recent years. The preamble of the Agreement expressly mentions the United Nations Convention against Corruption as a source.

Article 50: The Republic of Argentina is a signatory of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (of December, 1988), approved by Law 24.072, of which article 11 expressly provides for the so called “controlled delivery”, and it approved the Inter-American Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (adopted in Nassau-Bahamas, on May 23, 1992) , through Law 26.139. In addition, the Argentinean legal system includes the figure of the undercover agent.

### **3.2 Successes and Good Practices**

Article 44: It is considered a good practice that the Republic of Argentina grants extraditions even in the absence an extradition treaty.

### **3.3 General Recommendations**

- Regarding requests for extradition and mutual legal assistance, it is recommended that the competent authorities continue making efforts to ensure the completion of relevant proceedings in the shortest time possible.
- It is recommended that the information system currently in place continues to be developed, with the goal of compiling in a systematic manner information on extradition and mutual legal assistance cases, with a view to facilitating the monitoring of such cases and assessing in a more efficient manner the effectiveness of implementation of international cooperation arrangements.
- It is recommended to continue exploring opportunities to actively engage in bilateral and/or multilateral agreements, with the aim of enhancing the effectiveness of different forms of international cooperation.